REFLEXIONES SOBRE LA VIOLENCIA EN EL SALVADOR

Italo López Vallecillos

La sociedad salvadoreña presenta características, cada vez más definidas de violencia. La estructura del país, constituida por las relaciones de producción económica, ha ido generando a lo largo de muchas décadas una serie de formas jurídicas, políticas y culturales que apuntalan un estado de tensión, de desquiciamiento del "orden" ideado y planeado por los fundadores de nuestra República.[1] El proyecto democrático-burgués de los próceres que nos independizaron políticamente de España ha sucumbido al profundizarse el abismo entre las clases que detentan el poder del Estado y las clases trabajadoras convertidas en mero motor de la producción, riqueza a la que no tienen acceso, en virtud de la dominación ejercida por quienes tienen los medios productivos y los controles coercitivos necesarios para imponer un status por sobre las contradicciones y fricciones de la base social de El Salvador.

Reiteradamente se ha escrito que la sociedad salvadoreña es dual. Por una parte están los multimillonarios, y por otra, los multimiserables. En ese esquema, planteado incluso por autores liberales,[2] cabe no sólo la caracterización de la clase explotadora y de las capas medias subalternas, sino también del proletario urbano y de la inmensa mayoría de salvadoreños que viven en las zonas rurales en condiciones no de "campesinos" sino de masa explotada, marginada, pauperizada. La contradicción permanente entre los que tienen todo y en forma excedentaria y acumulativa, y los que no tienen nada, excepto sus vidas miserables y sin horizonte, es la que configura el estado de violencia en que se debate la sociedad salvadoreña. Esta institucionalización de la injusticia económica se traduce en formas legales de opresión.

La manifestación de la violencia institucional merece un análisis exhaustivo. No obstante, bastan algunas estadísticas oficiales para determinar con precisión que la caldera social está expuesta a un estallido en cualquier momento.

A continuación damos a conocer algunas cifras sobre la estructura económica y social del país, a manera de tipificar el **estado social** en evidente choque con lo que establece la Constitución de la República y la filosofía que, por años, ha inspirado

1– El plan constitucional de los próceres, según se desprende de los documentos históricos, planteaba la organización de una "república democrática, soberana, independiente de otros Estados", con la supresión de los trabajos de esclavitud y servidumbre.

2– Entre los autores liberales que se han preocupado por denunciar la dualidad del sistema, valga la frase "multimillonarios y multimiserables", acuñada por Romeo Fortín Magaña (Discursos Universitarios, Editorial Universitaria, 1959).

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

a los grupos democráticos y progresistas empeñados en que tal situación cambie, se transforme en la realidad. [3]

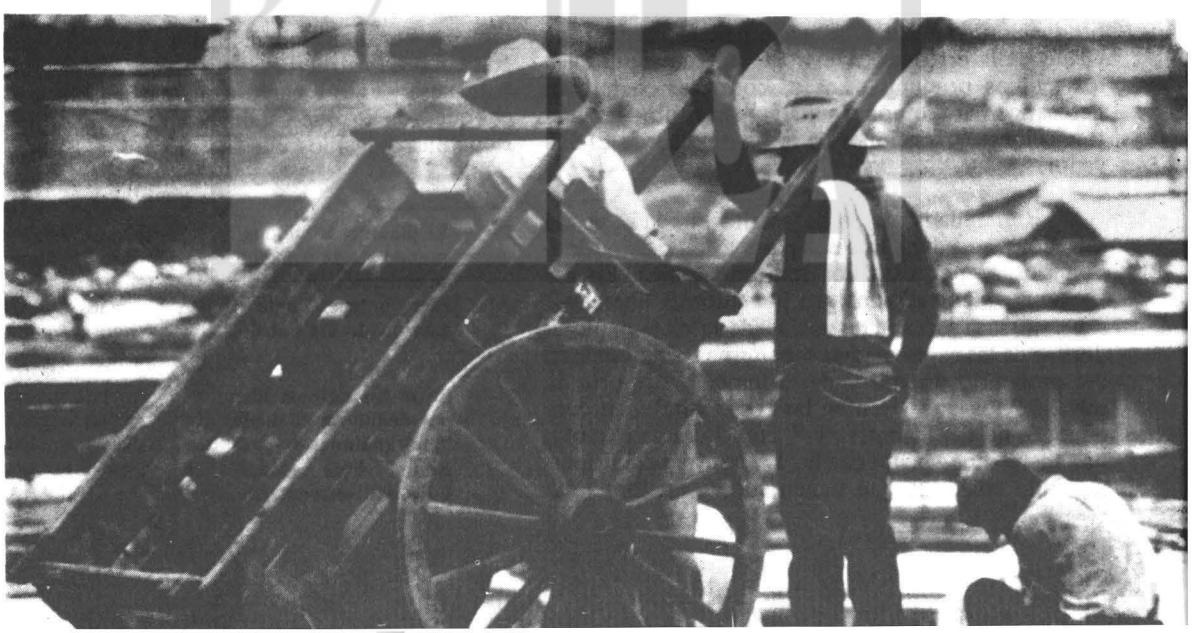
El "Plan de Desarrollo Económico y Social, 1973-1977", elaborado por el Consejo Nacional de Planificación Económica, arroja suficientes cifras para considerar a El Salvador no como a un país "subdesarrollado", sino en un proceso de estancamiento, proclive a la pauperización. Las tesis desarrollistas de post-guerra, por incapacidad de quienes han dirigido los destinos nacionales, han fracasado y las perspectivas de una auténtica viabilidad de nuestra economía, dentro del marco nacional y regional, son raquíticas. Nadie se llame a engaño por el "auge" de algunas construcciones elegantes en los llamados centros periféricos de la ciudad, ni por la "norteamericanización" acelerada de los metrocentros, donde abundan las cadenas de restaurantes, tiendas al mayor, cuya evidente base económica no es "nacional" sino extranjera. A este paisaje de rótulos en inglés, con un neo-español de pochos deslumbrados, suele calificársele no con poca razón de "colonización próspera". Lo de próspera es para los capitalistas foráneos, naturalmente. [4]

Intentemos resumir los datos económicos y sociales de mayor interés, a manera de contar con un marco de referencia, en el cual apoyar nuestra visión del problema.

1– La tasa de crecimiento económico de El Salvador, de 1961 a 1966 fue de 4.3 o/o y entre 1966 y 1971, de 0.6 o/o.
Si tales cifras se comparan con el aumento de la población, a una proporción de 157.060 por año, veremos que la expansión real per cápita de la economía es totalmente negativa, dado que, por muchos milagros que puedan hacerse, el producto nacional bruto se mantiene a precios constantes.
Este desnivel entre la producción y la población coloca a nuestro país en uno de los más bajos escalones del crecimiento económico, generando en los estratos sociales de menor ingreso, como es lógico, una reacción de inconformidad. Tan grave es el problema que El Salvador ni siquiera ha podido mantener la meta del 2.5 o/o de crecimiento que, en

3– La lucha entre conservadores y liberales en el país data de los inicios mismos de la Independencia. En tanto los primeros abogaban por mantener el régimen colonial, sin cambio alguno, los segundos se empeñaban en hacer práctico el ideario político y económico de la Francia napoleónica y de los EE.UU. en lo que se conoce como el pacto de Virginia. A lo largo de la historia, unos y otros grupos concluyeron por romper el acuerdo federal y finalmente establecieroh los pequeños "estados", a fin de consolidar los intereses oligárquicos. Por más de cien años (1839 a 1949) se da una pelea abierta por alcanzar el poder y cambiar evolutiva o revolucionariamente la sociedad. Se trata, claro, de movimientos ideológicos, sin mayor profundidad en la transformación del régimen económico y social. Las reformas de 1871 en Guatemala y 1886 en El Salvador son el triunfo liberal más destacado de los dos países.

4– Luis de Sebastián, en su trabajo "Las Crisis Económicas Mundiales y su Repercusión en El Salvador", apunta sobre este aspecto: "Buena parte de la inversión en la industria y en los servicios es de origen extranjero. De un capital registrado total de 812.357 miles de colones al 31 de Diciembre de 1971, 150.204 corresponden al capital de 166 sociedades anónimas extranjeras, o sea un 18 o/o". La proporción sería mayor si se incluyera en la estimación, las inversiones conjuntas de extranjeros y nacionales. ECA, mayo de 1974, pág. 246.



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

forma modestísima, se trazó la fenecida Alianza para el Progreso en aquellos días en que la política del Presidente Kennedy buscaba, con alguna sinceridad, "un nuevo trato" con América Latina.

2– El Salvador está caracterizado como un país agro–exportador, centrado su esfuerzo en el cultivo del café y en algunos otros productos agrícolas como el azúcar y el algodón, todos ellos sujetos al flujo de precios del mercado internacional. Esta dependencia real en el marco de la economía mundial, se agrava por la falta de visión e incapacidad gubernamental al no imponer nuevos rubros productivos en el área industrial y apoyarlos decidida y eficazmente.

Condicionada la economía salvadoreña al régimen de propiedad privada, y esto es hipérbole, pues la verdadera tenencia de la tierra asume caracteres "feudales", nos encontramos con barreras infranqueables. Según el censo de 1961, el 91.4 o/o de propietarios posee sólo el 21.9 o/o de las tierras cultivables y en el otro extremo, un 0.4 o/o posee el 37.7 o/o de esas tierras, elemento indicador de la alta concentración de la propiedad en pocas manos. En propiedades superiores en extensión a las 50 hectáreas el 1.9 o/o de los propietarios posee el 57.7 o/o de las tierras, "patrón" de propiedad privada lesivo a la concepción del Estado democrático-nacional, el cual "garantiza la propiedad privada siempre que esté en función social". El régimen de tierras determina que los beneficios de la producción quede en pocas manos. Siempre con base en el documento de CONAPLAN, veamos los índices siguientes:

a) El 8 o/o de la población recibe aproximadamente el 50 o/o del ingreso nacional;
b) El 92 o/o de la población percibe el 50 o/o del ingreso nacional
c) El 30 o/o de la población dispone de menos de ₡ 12.00 cada mes, lo que es igual a ₡ 0.40 diarios;
d) El 58 o/o de la población dispone de menos de ₡ 24.00 al mes, lo que es igual a ₡ 0.80 diarios.

Si el condensar estos datos, verificables en documentos oficiales, convierte a alguien en "comunista" o en "subversivo", es obvio que la acusación no sólo carece de seriedad, sino que es una especie de "sambenito" para continuar usufructuando un régimen de explotación y miseria, con muy pocas perspectivas de verdadera transformación nacional. En este aspecto de la táctica política de los enemigos de los cambios estructurales, cabe señalar que hasta los mismos funcionarios de CONAPLAN han sido señalados como "cepalistas contaminados por el virus del socialismo, del intervencionismo estatal" por el sólo hecho de establecer el marco desajustado de nuestra economía y sin que, hasta el momento, los gobiernos hayan movido un dedo para cambiar la correlación de fuerzas.

A los que por años hemos venido denunciando, a nivel político, esta miseria oculta con palacetes y "generosas" iniciativas de inversión, nos tiene ya sin cuidado la porfía de los agoreros de la oligarquía en "membretarnos" o "ubicarnos" en denominaciones que filosóficamente no nos corresponden. A más de uno de nuestros gobernantes militares, con todo y estar vacunados contra toda "infiltración" marxista y de contar con el beneplácito de las embajadas extranjeras, también los acusan de comunistas cuando en algún momento de remordimiento pretenden introducir alguna ley o crear alguna institución con miras a "desarrollar" en términos de cambio la economía del país.[5]

Nos asusta, claro, que las clases dirigentes no se den cuenta exacta de que el producto territorial bruto per cápita de ₡ 750.00 (un poco más de dos colones diarios por persona) es totalmente insuficiente para cubrir las necesidades mínimas y vitales de los salvadoreños. Cifra, por otra parte, que revela cuán injusta es la distribución de la riqueza en el país; la riqueza se debe no sólo al sector patronal y gerencial sino, y en gran medida, al trabajo de obreros, campesinos, empleados y otros servidores del sector privado.

5– La Prensa nacional de 1948 a 1956 está plagada de artículos contra el Presidente Osorio por la introducción de algunas medidas tendientes a mejorar la situación de las masas obreras y campesinas. Entre las instituciones que tuvieron mayor oposición en esta época, se destaca el Instituto Salvadoreño de Seguro Social y el Instituto de Colonización Rural, el Instituto de Vivienda Urbana, el Instituto Regulador de Abastecimientos, la creación y proyección de la Comisión Ejecutiva del Puerto de Acajutla (CEPA), la legislación sobre la Compañía Salvadoreña del Café, la CEL y el plan hidroeléctrico nacional. Las leyes más combatidas fueron las de impuesto sobre la renta, las leyes de trabajo, la del impuesto al café, etc. En períodos más recientes, la ley de nacionalización de la banca, la Ley de Avenamiento y Riego, de Arrendamiento de Tierras, de creación de la Junta Monetaria, de Transformación Agraria. Paradójicamente, hasta a gobernantes manifiestamente anticomunistas como Rivera, Sánchez Hernández y Molina se les ha acusado de "comunistas" en las esferas de la oligarquía y de las capas burguesas de servidumbre.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Dr. Cecilio Bustamante,
Ministro de Gobernación
Fomento y Agricultura.

Dr. Francisco Martínez Suárez,
Ministro de Relaciones Exteriores,
Justicia e Instrucción Pública.

Dr. Enrique Córdova,
Ministro de Guerra y Marina.

Dr. Francisco A. Lima,
Subsecretario de Gobernación,
Fomento y Agricultura

Dr. Tomás G. Palomo,
Ministro de Hacienda, Crédito
Público y Beneficencia.

Don José E. Suay,
Subsecretario de Hacienda,
Crédito Público y Beneficencia.

Dr. Reyes Arrieta Rossi,
Subsecretario de Relaciones
Exteriores y Justicia.

Dr. David Rosales, h.,
Subsecretario de Instrucción
Pública.

LOS CIVILES EN EL GOBIERNO
Gabinete del Presidente Carlos Meléndez (1915-1918)

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

3– Con respecto al censo de población de 1960, las últimas estadísticas de 1972, indican que ha habido un aumento poblacional del 40 o/o. Todo hace prever que para 1980, de continuar los actuales índices de fecundidad y mortalidad, tendremos cerca de 7 millones de salvadoreños, y para el año 2,000 un total no menor de los diez millones de habitantes. Esta población, de no atenderse el cambio estructural y mejorar los niveles de producción y distribución, será un peso catastrófico para nuestro país, situado en una pequeña zona costera de escasos 21,000 kilómetros cuadrados.

Una adecuada política poblacional sólo puede establecerse en relación a un plan económico y social viable, y si "el habiatante es riqueza" como sostienen algunos entendidos, es contraproducente que la mayoría de nuestra población se encuentre inactiva, desocupada, marginada.

Aunque la edad media de la población salvadoreña bajó 31.2 años en 1961 a 30.3 años promedio de 1973, la proporción de menores de 15 años subió de 45 a 46.3. No obstante este "rejuvenecimiento" de brazos para las labores agrarias e industriales, cabe señalar que la tasa de dependencia real muestra que por cada salvadoreño activo hay 3.7 inactivos o desocupados. Esta tasa, dado el nivel de desocupación y sub-utilización de los recursos humanos, puede duplicarse, de manera que los ingresos por núcleo familiar son bajísimos, con un régimen alimenticio semejante a Bangladesh, como lo veremos más adelante, y sin ninguna capacidad de ahorro.

4– Con tales condiciones de miseria, es muy difícil que el Estado salvadoreño pueda de verdad efectuar una reforma educativa o intentar la ejecución de un plan de proporciones aceptables. La razón es muy sencilla: no hay suficientes recursos económicos para responder a la demanda educativa de una población que crece bajo el signo de la pauperización.

De 1960 a 1970 el país logró reducir el analfabetismo de un 49 o/o a 40 o/o, lo cual es significativo. También es de reconocer los esfuerzos hechos en el período gubernamental de Rivera y Sánchez Hernández (1962 a 1972) por introducir nuevas técnicas educativas y sobre todo por el ambicioso programa de estructurar "el segundo piso" de la educación nacional, a base de una diversificación del bachillerato, y orientar las carreras hacia el desarrollo industrial, comercial, turístico y académico del país. La reforma, de la cual Walter Béneke aparece como responsable, es criticada por diversos pedagogos en sus aspectos metodológicos como programáticos, pero sus frutos aún no pueden ser evaluados en forma definitiva.

El hecho, en todo caso, es que, si bien se bajaron los índices de analfabetismo en las zonas periféricas a las ciudades, en el campo el nivel de analfabetos en estos momentos es de 50 o/o y que los resultados tremendos son, en apoyo a la documentación de UNESCO y CONAPLAN, nada menos que éstos: el porcentaje de la población escolar mayor de 6 años que aprobó algún grado ha subido de un 42 o/o al 51.5 o/o. Si se estima la cantidad de población económicamente activa, es decir de 15 a 64 años, la proporción de quienes han aprobado algún grado escolar es de 44 o/o.

Dentro de una concepción de desarrollo económico no es despreciable que los gobiernos

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

le hayan dedicado gran parte de los recursos a la preparación de técnicos medios, obreros calificados, personal para la actividad agropecuaria y comercial. Lo inexplicable es que se abandone el primer piso educativo en las zonas rurales, donde habría que realizar la total alfabetización y donde cabría educar a las masas campesinas para un mejor desempeño de su rol productivo y su incorporación al proceso social, ya que sin educación agraria no hay transformación nacional.

5– En cuanto al área de la salud, conviene señalar que en El Salvador hay 3 médicos por cada 10.000 habitantes; 2.3 enfermeras por 6 mil habitantes. En San Salvador hay una gran concentración de médicos, en tanto en los cinco departamentos orientales hay solamente 0.9 médicos por cada diez mil habitantes. La dotación de camas de hospitales es insuficiente, al grado de considerar como aproximada la cifra de 17 mil habitantes por cada cama en 1971. Con el crecimiento de población estos datos resultan inexactos, pues los recursos gubernamentales para la salud popular son cada vez más escasos en razón de que mientras no se atienda la medicina preventiva y social todos los esfuerzos caerán en un saco sin fondo, sin posibilidad de curar eficazmente a un pueblo sub-alimentado, en condiciones sanitarias bastante deprimentes.

Las diez principales causas de enfermedades transmisibles son las mismas de 1965-1969, atreviéndonos a indicar que, según datos de CONAPLAN, el porcentaje se ha elevado con respecto a los últimos cinco años de 33 o/o de casos a 41.7 o/o. La mayor parte de defunciones en el campo y poco a poco en las ciudades son las enfermedades diarréicas, la disentería bacilar y amibiana, las cuales ocasionan más de la quinta parte de la muerte de la población sin recursos económicos. El Seguro Social apenas cubre al 6 o/o de la población; y la asistencia facultativa por parte del Estado en hospitales y clínicas en todo el país no llega a atender al 30 o/o eventualmente.

Si el consumo mínimo de calorías per cápita al día, es de 2.200 según el INCAP, la situación del salvadoreño para 1960 fue de 1.797 descendiendo en 1973 a 1,682 calorías promedio que nos coloca en un grado de sub-alimentación alarmante. Las cifras anteriores se hallan registradas en el estudio "Dieta y Nutrición", Cuadro F–2 pág. 135, publicado por el Instituto en Nutrición de Centro América y Panamá. La disponibilidad de alimentos durante 1970 no cubrió ni el 50 o/o de los requerimientos básicos del año. Las familias campesinas tradicionalmente alimentadas con maíz y frijoles, han dejado de consumir tales productos en cantidades apropiadas en razón de que las tierras ahora se destinan principalmente a la siembra y cultivo de algodón, caña, verduras y frutas con el único propósito de exportarlos y obtener divisas. Las dietas alimenticias del agro han sufrido mengua porque los frijoles, el maíz y algunos tubérculos, etc. se producen escasamente por su poca rentabilidad. En más de una ocasión tales productos también se han exportado. En cuanto a las proteínas los porcentajes por años oscilan de 45.3 en 1960 a 41.7 en la actualidad, en una situación desastrosa que incide en la salud popular.

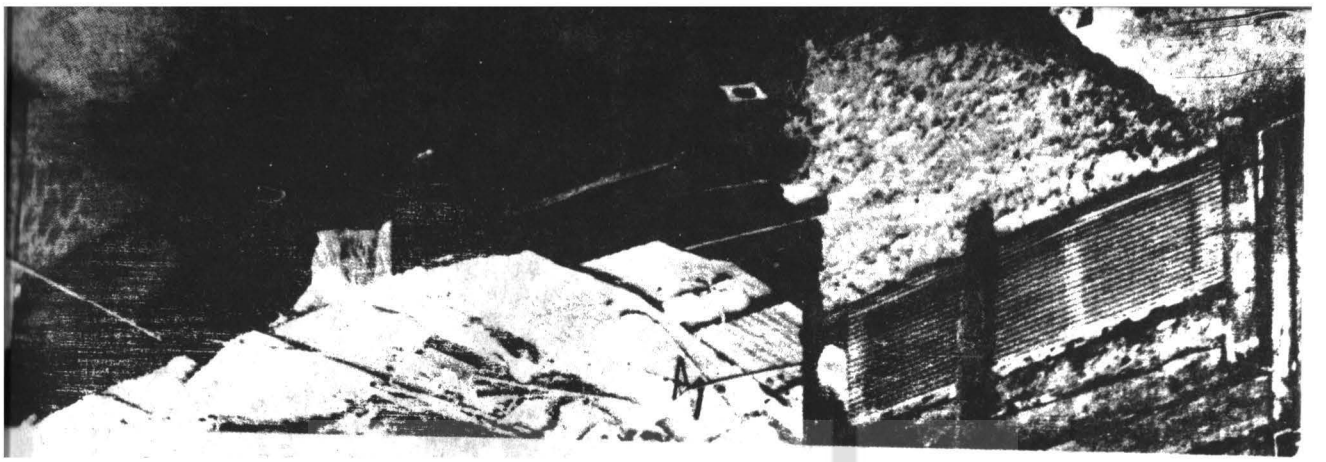
Lo peor de todo es que El Salvador carece de una política nacional alimentaria y los organismos creados para atender el problema, el IRA por ejemplo, han sido incapaces de imponer criterios definidos y más bien se han dedicado a la importación de granos básicos y a la comercialización de los mismos. No estamos en contra del IRA como tal, sino en contra de la ausencia de planes concretos que promuevan el auge de la siembra y venta de granos básicos a precios al alcance de la población de escasos recursos.

6– Otro aspecto que contribuye a configurar la estructura económica y social del país es el relacionado con las condiciones habitacionales. En 1969 se calculaba un déficit de 504.555 viviendas, de las cuales 178.400 correspondían a la zona urbana y 473.955 a la rural. En la ciudad de San Salvador unas 80.000 personas viven en tugurios, champas o fuertezas, y unas 27 mil viven en "mesones", en cuartuchos estrechos y promíscuos.

7– Finalmente y para no alargar este recuento de estadísticas oficiales, dramáticas para quienes tenemos una profunda sensibilidad social, señalemos que según tablas censales la tasa de desempleo abierto subió de 5.1 o/o en 1961 a 20 o/o en 1971. De este desempleo, 45.9 o/o se da en la población femenina y 9.5 o/o en hombres; en el área rural dos terceras partes de la población femenina estaban desocupadas, y un 26 o/o en la zona urbana. En lo referente al desempleo de hombres, había un 13.7 o/o en el campo y un 7.1 o/o en la ciudad. El subempleo alcanzó en 1974, en el sector agropecuario, cifras mayores del 49.2 o/o.

Todos estos elementos, económicos y sociales,

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



configuran una estructura de desequilibrio, de desajuste, en la base de la sociedad salvadoreña. No es un invento ni una falacia lo de la "violencia" institucional a la que con harta frecuencia se refieren los sociólogos, los politólogos y más de algunos economistas, incluso graduados en escuelas norteamericanas y por lo tanto no sospechosos de ser "comunistas" o "subversivos" según la terminología utilizada por quienes se parapetan en ese estribillo en defensa de las clases minoritarias y privilegiadas.

Negar con estos hechos irrefutables la **situación** tensa que vive la población salvadoreña, la injusticia cotidiana, y tornar los ojos únicamente a los elementos de infra-estructura, de aparente crecimiento económico, es ignorar que el desarrollo es un fenómeno integral, humanizador, rehabilitador del nivel de vida de los pueblos, y en consecuencia exige reformas radicales, profundas que, sin la menor duda, afectarán a unas cuantas familias, pero devolverán a la nación salvadoreña la dignidad humana que legítimamente le corresponde en un mundo civilizado.

No deseamos regatear el reconocimiento a los intentos, a las buenas intenciones, y hasta a los sacrificios de algunos gobernantes de 1931 a la fecha por "hacer algo", por cambiar en alguna medida este estado de cosas; lo cierto es que el tiempo ha avanzado y el país se encuentra con una producción deficitaria, una distribución de renta en favor del privilegiado, y una población creciente sin que las medidas tomadas hasta ahora sean en verdad una medicina para los males denunciados. En el mejor de los casos se trata de paliativos, parches porosos, para una larga y prolongada enfermedad institucional.

Son estos datos los que nos mueven a tocar la conciencia reformista, democrática y radical del país, para que se definan de una vez las capas sociales interesadas en el cambio. Y para que, de alguna manera, se cuantifique la violencia estructural que da lugar a ese otro tipo de reacción airada, de odio, de los oprimidos contra los opulentos.

Por el momento los signos violentos se dan aisladamente en múltiples actitudes, en comportamientos que podemos identificar no sólo por la diaria información periodística, sino en los niveles de relación de las distintas clases sociales. El hombre salvadoreño, reprimido dentro de las condiciones del medio, es "otro", en cuanto suelta las amarras del formalismo social.[6] Bastan unas cuantas copas de licor para tornarse de pacífico profesional, empleado, obrero o campesino, en airado busca pleito. Las cadenas impuestas por el orden establecido, se rompen invisible pero tremendamente, en cuanto se presenta una oportunidad. El tema, propio para los estudiosos de la psicología social, nos conduciría, a la tipificación individual y colectiva del salvadoreño en estado de conflicto, de presión. Esta crisis se agudiza no sólo en los estratos de más bajo nivel económico, sino también en los más altos sectores sociales, donde es frecuente el uso de armas de todo tipo a manera de protección contra las fuerzas que, desde abajo, protestan por la situación histórica que planteamos.[7]

El choque se produce a diario, sin llegar a ser una batalla armada. El asalariado no retribuido **justamente** acumula una tal cantidad de resentimiento,

---

6– Ignacio Martín-Baró en su estudio "El Valor psicológico de la represión política mediante la violencia" analiza los efectos de la violencia en el reprimido y en el represor, tanto como en los del mero espectador, señalando la interacción a escala psíquica y social. En un medio como el salvadoreño, donde se han institucionalizado los métodos de tortura física y psicológica, cabe indicar que el refinamiento de los represores está a la altura de los regímenes de la Europa fascista. ECA, diciembre de 1975, págs. 742-752.

7– Desde el secuestro y muerte del industrial Ernesto Regalado Dueñas, hecho violento ocurrido el 18 de febrero de 1972 y del cual se culpa a las guerrillas revolucionarias marxistas, los grandes propietarios de la tierra, los industriales ricos, andan con guardaespalda y más de alguno con metralleta, etc. En orden parecido, la capa gerencial, no dueña de los me-

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

de indignación canalizada en su clase, que es muy probable que a breve plazo "rompa" con todo el andamiaje jurídico y político que sirve de sostén al régimen. El rompimiento no necesariamente se manifiesta en la pedrea, en el alzamiento de los machetes; se da y con mayor fuerza en la falta de confianza en las instituciones democráticas. El hombre del pueblo, el más corriente de los salvadoreños, advierte que el régimen no **cumple** con los postulados de la Carta Magna, excepto en aquello que favorece a las minorías.[8] Y ello se torna más obvio para él cuando los salarios no compensan sus esfuerzos ni satisfacen sus necesidades vitales, en tanto los ricos se hacen cada día más poderosos, y sus leales y obsecuentes servidores, los funcionarios públicos, de "elección popular" o no, sirven los intereses de una clase en particular y no de todo el pueblo, como rezan los artículos constitucionales.[9] He aquí el desfase entre la realidad económica a la que los trabajadores están incorporados por la mecánica de las circunstancias y el proyecto de nación salvadoreña consignado en el pacto social de la Constitución Política de 1950, luego de 1962, pacto burlado una y otra vez por quienes tienen el poder económico y por ende determinan el poder político y militar del Estado.[10]

La estructura económica y la superestructura legal edificada, ha llegado en El Salvador a un grado de crisis. Tal afirmación la hacemos amparados en los datos de violencia institucional y los datos de resistencia, lucha o desesperación de las clases oprimidas. Estamos a las puertas de una eclosión de las muchedumbres. Los lazos de unión de las clases dominantes con sus tradicionales aliados, la iglesia católica y el ejército, se han debilitado en los últimos tiempos a un grado insospechado e irreversible![11]

---

dios de producción, también ha adquirido rifles, pistolas, etc. **sintiéndose** de alguna manera amenazada por servir a la oligarquía. Deseo aclarar que la muerte de Regalado Dueñas no ha sido esclarecida, recogido el rumor de que "fue asesinado por elementos vinculados con el gobierno de Sánchez Hernández por saber demasiado sobre supuestos manejos económicos de los bonos de la guerra de 1969 con Honduras". Jorge Pinto hijo en "¿Por qué fui presidiario?" (La Crónica, Agosto de 1975).

8– Ejemplo de esto es la violación al espíritu y la letra del Título IX **Regimen Económico de la Constitución Política**, especialmente en lo que atañe a la libertad de comercio, a la propiedad privada, expropiación y confiscación, monopolios, etc., ya que se eleva a categoría de "intocable" todo lo que afecte los bienes mostrencos, sin advertir que la libre empresa está garantizada en razón del bien público y siempre que cumpla una función social. Léase los artículos del 135 al 149 y se verá que el Estado se cruza de brazos cuando se trata de limitar los beneficios de la minoría económica del país.

9– En el Título I **El Estado y su forma de Gobierno**, la Constitución fija claramente la naturaleza filosófica de la República y en sus artículos del 1 al 11 establece un conjunto de normas que no se respetan y hacen nugatoria, en la práctica, la democracia, la soberanía popular, el bienestar social.

10– La crisis de la democracia social en El Salvador se inicia poco después de ser aprobada la Constitución de 1950, al dejarse seducir los líderes de la revolución de 1948 por el grupo oligárquico, bien que muchos políticos pasaron a ser parte de la alta burocracia o se convirtieron de la noche a la mañana en prósperos comerciantes o industriales. Una pequeña lista de tales líderes y una ligera investigación determinaría el cambio de status social, ello quizá sin recurrir al Registro de la Propiedad, Raiz e Hipotecas, a la Junta de Vigilancia de Sociedades Anónimas, a las fuentes bancarias, o a la composición de accionistas y empresarios de las nuevas industrias. Un ejemplo de honradez es el de Reynaldo Galindo Pohl, revolucionario y constituyente de 1950, que tres veces ha rechazado la postulación presidencial. Un no que muchos no entienden, pero que hará también la historia de este período.

11– El antiguo triángulo: capital, iglesia y ejército, como sustentación social está roto. El capital en nuestro país: los terratenientes a escala mayor, los industriales y conexos, están en lo suyo: la acumulación, el enriquecimiento para invertir en. . . el enriquecimiento; la Iglesia, después de las encíclicas papales y de la renovación interna en los cuadros principales de la jerarquía católica, apostólica y romana, ha variado en 180 grados su posición, condenando al capitalismo en cualquiera de sus formas; y el ejército, depositario del gobierno civil, frenado en sus "reformas", ya no es tan dócil a la mano férrea del viejo gamonal que decidía en su hacienda o en el casino, qué, quién y cómo deberían resolverse los problemas políticos y sociales, sin la intervención de la peonada rural ni de los obreros urbanos y sin que las capas medias hiciesen la más mínima observación. Ahora ni las limosnas a la iglesia, ni el halago a los militares, hace posible el "equilibrio", la paz del sistema que tiende a derrumbarse.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

General Maximiliano Hernández Martínez, Presidente (1931–1944)

Naturalmente este quiebre, esta ruptura, no es sino un pequeño síntoma de que los tiempos exigen una toma de posición con respecto a la violencia, sea que se defienda el sistema actual de producción económica contra todas las tempestades, sea que se tome partido por el cambio estructural.[12] Algunos piensan que de producirse un choque frontal entre el sistema oligárquico y las fuerzas interesadas en la transformación social, el ataque debe dirigirse contra las relaciones de producción, dentro del marco constitucional, a manera de modificar mediante ese acto las formas sociales más importantes.[13]

Otros consideran que para que el salvadoreño (o el centroamericano en plan más ambicioso) realice su personalidad histórica sin alienación, debe destruir el Estado por su carácter burgués, clasista, y por no poder dentro de las reglas jurídicas actuales desplazar a la clase en el poder por las vías pacíficas y democráticas.[14] El hecho de que se sostengan estas ideas por partidos políticos, grupos de presión, sindicatos y gremios influyentes como el de los educadores, llama a reflexionar sobre el grado de evolución ideológica y de postura transformadora que se opera en la sociedad salvadoreña.

Todos los sectores, incluso las capas medias en el orden gerencial y técnico, son partidarios de un cambio de régimen económico y, por lo mismo, de formas jurídicas y culturales distintas.[15] La polémi-

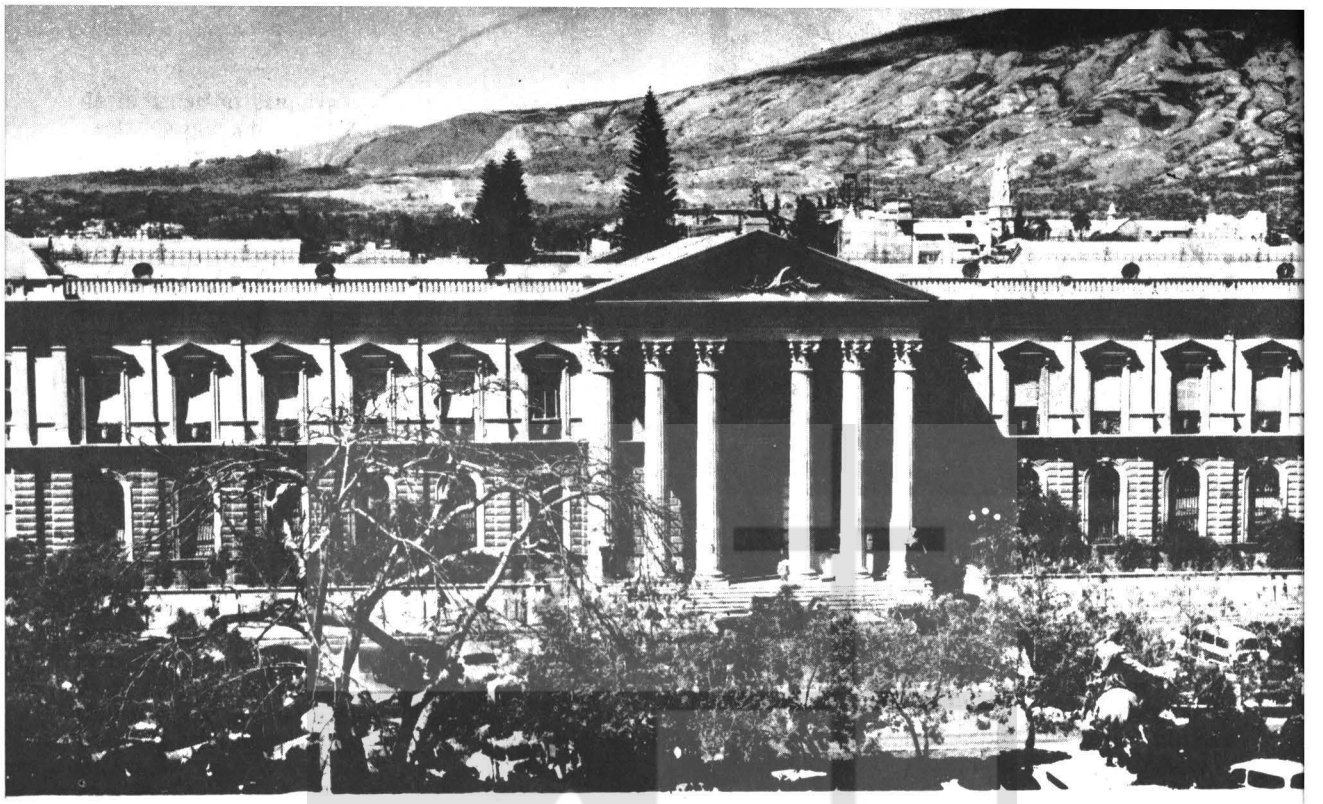
12– La cuestión así planteada no es sólo un hecho actual de El Salvador; en circunstancia parecida se encuentran las demás naciones hispanoamericanas en un proceso histórico más o menos irreversible. La polarización obliga a actuar hasta a las personas acomodadas y tranquilas.

13– Esta tesis podría ubicarse dentro del **reformismo radical**, pues no pretende la destrucción del Estado histórico y su ejército, sino la renovación total y profunda de la vida salvadoreña con base en las realidades actuales y la **tradición progresista** del país. La afirmación en sí de que "dentro de las normas constitucionales, bien cumplidas, puede lograrse un estado social justo, libre y soberano", implica una estrategia política diferente a las "revolucionarias".

14– Estas son las tesis marxistas, expresadas por sus clásicos y con expresión viva en diferentes revoluciones que han surgido en Europa, Asia, Africa y América Latina.

15– Los grupos técnicos ante la alternativa de un levantamiento de las masas también hablan de "desarrollar" rápidamente al país, aunque su acción se centre en una serie de empresas que pretenden generar empleo y llevar bienestar a las capas medias y sector obrero, es obvio que carecen de un programa claro y preciso. El actual sistema es obsoleto porque no puede crear el empleo que la población demanda.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



ca se da en los núcleos partidistas como una consecuencia de la exigencia popular por el cambio. Quizá nunca el nivel de opresión había llegado a extremos tan significativos como ahora en el país, a tal grado que la preocupación por el "cambio" se manifiesta en discursos presidenciales, en piezas oratorias de Ministros de Estado, en ejecutivos de cámaras patronales, en un afán de integrarse a un movimiento reivindicativo que, evidentemente, excluye la participación de la clase en posesión de los medios de producción.

Cuando hablamos de la violencia institucional o estructural, y de la violencia de abajo, estamos claramente planteando un proceso que exige resoluciones sociales concretas en favor de los oprimidos. Pero hay que tener cuidado. Cuando se vuelve lenguaje corriente el "cambiar las estructuras" se está pensando sólo en las instituciones jurídico-políticas del Estado, y no en una transformación radical, profunda, del sistema de vida de nuestra sociedad. Nosotros no entendemos "revolución" como toma del poder público, como suele acontecer en muchos países donde los movimientos políticos concluyen por "consumirse" en simples cambios de gobierno, en el traslado de firma con ligeras modificaciones en el orden político, y pequeñas "reformas" que, en el fondo, no hacen sino repellar y apuntalar por algún tiempo el viejo edificio social. La frase del Gatopardo "algo hay que cambiar para que todo quede igual" viene bien como ejemplo. La toma del poder, o el pueblo al poder, como suele enunciarse con un poco de triunfalismo por parte de quienes quieren "épater le revolucionaire" no se da espontáneamente o como un acto de conjunción de voluntades individuales, carismáticas; tal acto revolucionario obedece a determinadas condiciones sociales y a la confrontación entre una clase históricamente liquidada y otra en ascenso, en virtud de su fuerza económica y sus postulados ético-políticos.

En El Salvador, además de las realidades económicas injustas que hemos descrito, y las cuales determinan una estructura incapaz de enfrentar la problemática social, hay un proceso de concientización que, a la vez que genera y aglutina fuerza en las clases oprimidas, polariza energías y recursos de todo tipo en la clase hegemónica. De ahí que, cuando nosotros hablamos de violencia, hagamos énfasis en las instituciones políticas, jurídicas, económicas, culturales y sociales en general y no en los gobiernos pasajeros que hemos padecido y padecemos, pues éstos no son sino instrumentos de la violencia estructural

El Ejército mismo, al que equivocadamente se achaca el estado de opresión, no es sino una institución enmarcada dentro de esa injusticia integral impuesta por la clase dominante, institución que poco a poco ha ido comprendiendo su papel de estamento al que se le ha encargado el "cumplimiento" de

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

la Constitución en abstracto, y el cual no puede hacer nada sino obedecer en el juego de los grandes intereses oligárquicos, y hacer dudosos "equilibrios" en la pugna por el poder entre los de arriba y los de abajo. Por uno de esos raros contrasentidos históricos, o por puro acondicionamiento mental, el ejército se considera "el centro", la fuerza "media", cuando en verdad toda su organización y su desplazamiento opera en la esfera de quienes manejan y controlan los medios de producción y establecen las normas injustas que hacen posible, evidente y hasta insoportable la violencia social. El centro no existe cuando las relaciones sociales son injustas. Quien se coloca en esa posición a-histórica, a-política, lo que hace es acomodarse al poder establecido; es seguro que en el seno de todas las instituciones y más aún en el ejército, se den las contradicciones de la sociedad convulsa que vivimos, pues con todo y no ser correcta la tesis "centrista" en estas circunstancias de lucha, es obvio que cada día los tenedores de las armas se vuelven más críticos del poder económico irreductible.[16]

En pocas líneas podríamos señalar que en nuestro país, en los últimos 60 años, el desajuste entre el ejército y la gran oligarquía ha ido asentándose en base a pasajeras diferencias sobre los métodos de gobierno, los planes de desarrollo a corto y mediano plazo, la distribución presupuestaria, el nombramiento de ejecutivos en las oficinas públicas, etc. Los gobiernos de Manuel Enrique Araujo (1911-1913) y Pío Romero Bosque (1927-1931), para citar dos presidentes civiles, ayudaron a "independizar" un poco a la fuerza armada del absolutismo de los regímenes civiles de épocas anteriores. El fenómeno no se da abierta y francamente, sino en una evolución conflictiva. El estudio detallado de la campaña electoral de 1929-1930, refleja en gran medida la lucha por el control del gobierno por los civiles de viejo estilo y la élite militar modernizante.

La situación política, social y económica del año 30, ya desde entonces "explosiva" por los grados de miseria del pueblo, no ha sido superada sino en parte por las medidas que han tomado los altos mandos de la fuerza armada. La entronización de la llamada "dictadura militar" no es un fenómeno casual, sino que obedece a la incapacidad de los terratenientes de estilo feudal, de mantener el antiguo estado de cosas.[17]

El reformismo de 1934 año en que se inicia la modernización del actual Estado salvadoreño,[18] se da como consecuencia de una confrontación brutal: los campesinos en armas, insurrectos, contra un sistema opresor, caduco. La revolución de 1932, con ligeros matices de "comunismo", planteó en términos claros la cuestión: evolución acelerada o revolución. Intentar volver al pasado, e incluso tratar de dejar las cosas como están, es desconocer las leyes de desarrollo capitalista dependiente en que se encuentra el país. Los sectores progresistas que han apoyado estos "cambios" están conscientes del resultado operado de 1934 a la fecha, y más todavía con la variante introducida en la década 1950-1960, período de post-guerra mundial que convirtió a la capa industrial en agente del sistema capitalista internacional en el país.

Este tema, apenas esbozado, es de enorme importancia para entender las contradicciones, fricciones más bien, entre los grandes terratenientes y los empresarios urbanos. En El Salvador, no obstante, muchos latifundistas además de dedicarse a la explotación agraria (café, algodón, azúcar, etc.) han ido desplazándose a otras actividades lucrativas: la importación y exportación de manufacturas, la banca, los seguros, la inversión en la construcción de viviendas, cadenas de hoteles e industria alimenticia, todo en asocio con financistas norteamericanos, japoneses y europeos. El hecho que deseamos destacar es que, si por una parte la oligarquía de "viejo cuño" y la alta burguesía controlan el poder económico, en otros aspectos el poder político (el gobierno) ha adquirido "alguna autonomía", mediante la influencia cada vez mayor de las

16– No sólo el programa político de 1948, consignado en los 14 Puntos de la Revolución de ese año, sino la Proclama del Ejército de 1961, así como numerosos discursos presidenciales indican una posición de "ruptura" entre el gran capital y las élites militares.

17– Sería saludable conocer los planteamientos políticos y económicos de las llamadas catorce familias, para poder estimar si como clan poderoso tienen alguna idea de cómo gobernar el país y, naturalmente, atender la idea ya históricamente enraizada en el pueblo de la "justicia social".

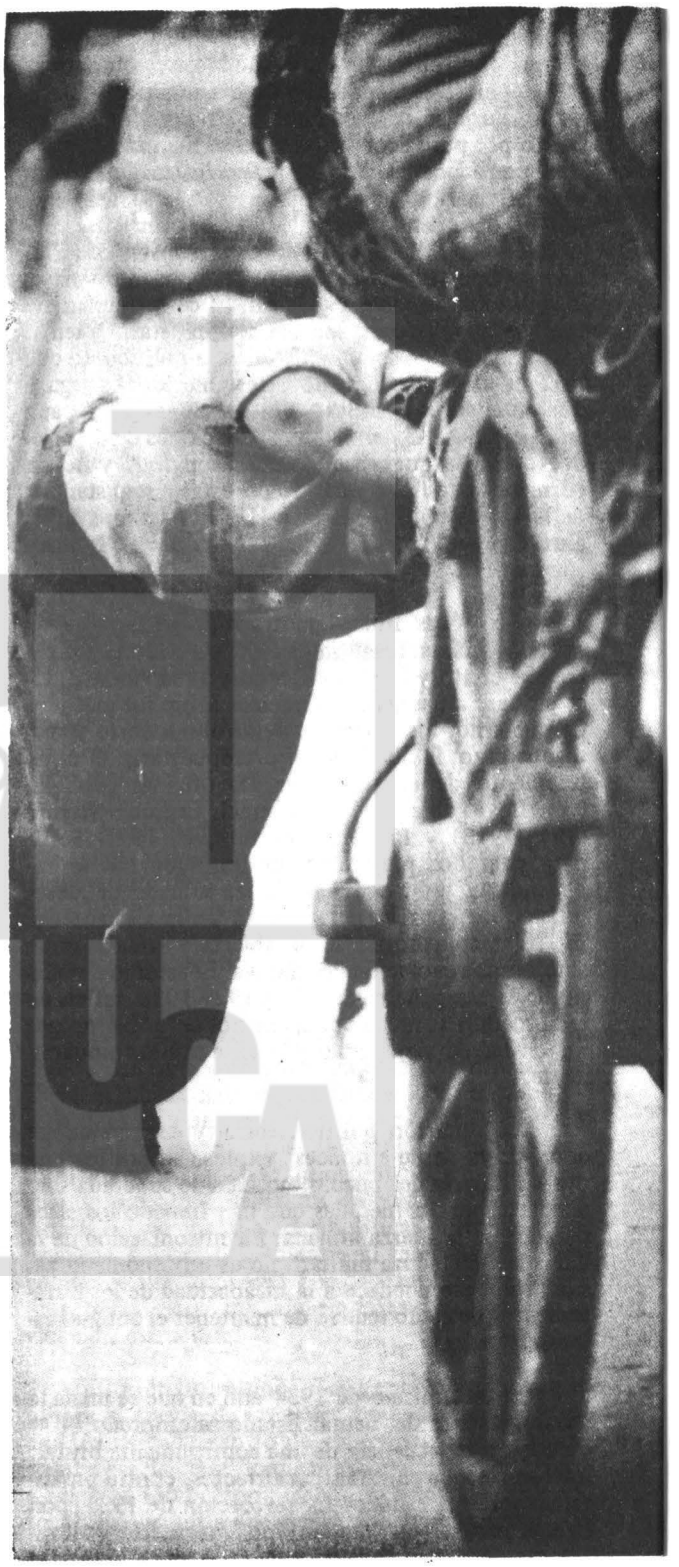
18– Al régimen de Hernández Martínez se le puede culpar de muchas cosas graves: el irrespeto a los derechos ciudadanos, la violación de las libertades fundamentales, la feroz persecución contra los opositores. Pero nadie puede negar que con su gobierno se inicia el período de la modernización del actual Estado de El Salvador, calificando al propio General Martínez como "el reformador del país". El plan de cambios llevado a cabo por el tirano comprende: creación del Banco Central de Reserva de El Salvador y del Banco Hipotecario de El Salvador, Federación de Cajas de Crédito, Instituto de Mejoramiento Social, lo que hoy es el IVU y el ISTA, obras públicas (carreteras y puentes, sin inversión extranjera), apoyo a los medianos y pequeños cafetaleros mediante legislación ad-hoc y crédito bancario, apoyo a la industria textil y de jabones y otros, etc.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

élites militares en posesión de cargos relevantes dentro y fuera de la propia fuerza armada.[19]

Sostenemos, en síntesis, que el ejército en la época de Hernández Martínez sirvió de base al "reformismo", como sucediera en el breve período de cambios acelerados de Osorio (1948-1956), o del Directorio Cívico Militar de 1961-1962, aunque en todos estos ejemplos se advierta que el transformismo no obedeció a una idea clara de lo que se quería cambiar, pues los militares no se atrevieron a utilizar o no pudieron, que es lo real, la fuerza de las armas para poner en cintura al poder oligárquico.[20]

Tales elementos de juicio son valederos para no confundir poder con gobierno. El poder ha estado y está en manos de la oligarquía; el poder ha sido ejercido, en años atrás, por gobiernos civiles (gamonales en su mayoría y profesionales de levita) y por "gobiernos militares" en los últimos 44 años, aunque la titularidad de los presidentes castrenses no ha sido efectiva sino en cooperación con altos técnicos o profesionales civiles sin escrúpulo, y generalmente temerosos del poder económico, cuando no "empleados" introducidos por las grandes familias en el gobierno para influir en la gestión del sector públi-



19– Antes de 1931, año del golpe militar que llevó a la Presidencia al General Hernández Martínez, los cargos de Ministro de Defensa, Ministro del Interior, eran desempeñados por civiles. Incluso la Policía Nacional, la Guardia, la Policía de Hacienda eran dirigidas por civiles o por militares de dedo. Con el correr del tiempo no sólo esos Ministerios, sino otros cargos relevantes, como asesores presidenciales, son ocupados por militares. Y hay puestos de la administración pública, tales como las Direcciones Generales de Migración, Correos, Telecomunicaciones, Estadística, ISTA, INSAFI y otros cargos claves que se entregan exclusivamente a militares. Ello lo han hecho, me parece, para salvaguardar no sólo la seguridad nacional, sino para tener un mayor control gubernamental y en cierto modo mantener la viabilidad del plan reformista esbozado desde 1934 por Martínez.

20– En momentos de crisis política el ejército se ha dividido en tres sectores: los reformistas, los conservadores y los de ultra-derecha. Estos últimos han hecho que la ruptura con el gran capital no se produzca, sea por amenaza de un cuartelazo, bien por impedir que el "caos" y la "anarquía" acaben con lo poco que se ha conquistado en el terreno social. No es difícil visualizar la conexión directa e indirecta de los militares ultra-derechistas con el capital oligárquico y feudal. Algunos líderes del ejército, de alta desde luego, son "agasajados" y "comprometidos" políticamente en una u otra forma. Ya fuera del ejército, la oligarquía y la alta burguesía ni siquiera se recuerdan haberles "conocido". No cuentan para nada en el plano civil ni militar.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Coronel Oscar Osorio, Presidente (1950–1956)

co; muchas veces estos "civiles" con el membrete de "técnicos" han bloqueado o desnaturalizado el propio plan de los militares.

Es bueno agregar que por extracción de clase los oficiales del ejército salvadoreño no pertenecen a las capas privilegiadas; muchos de ellos provienen de hogares humildes, hijos de maestros de escuela, de profesionales universitarios ubicados en la pequeña burguesía, cuando no en el sector de artesanos, obreros y hasta campesinos con tierra, pero de ninguna manera oligarcas. Sucede que, como en todo ascenso presupuestario, algunos oficiales se "acomodan" al sistema al llegar a los altos puestos gubernamentales, defraudando a los militares de baja graduación, y posponiendo el "plan reformista" que les toca cumplir en el proceso histórico nacional. Esta consideración es válida para desvirtuar de una vez por todas la especie de que basta ser militar para enriquecerse. Compárense las tablas de salario del gobierno y las de la empresa privada y se verá que personas, con menor preparación, ganan más que jefes y oficiales de la fuerza armada. Soldados incorrectos, abusivos en los cargos los hay en el ejército, pero por ellos no podemos juzgar a todo el estamento militar.

Los asesores universitarios han sido responsables de muchos episodios desagradables en la vida nacional: reelecciones; represiones brutales contra obreros y campesinos; violaciones al orden constitucional al capturar y desterrar ciudadanos por propio consejo civil; intervención de la Universidad en diferentes épocas y violación de su autonomía; corrupción de las instituciones judiciales y administrativas; desprestigio de los órganos del Estado al no hacer válida la división de poderes y al convertir a la Asamblea Legislativa en una oficialía mayor del titular de la Presidencia de la República e introducir en las grandes decisiones públicas el partidarismo, y no el bienestar general por encima de las ambiciones de grupos.

No queremos excusar de responsabilidad a los grupos militares que cada cierto tiempo asumen el gobierno del Estado; no, ellos en razón de apetencias explicables y por un "destino manifiesto" llegaron a la cosa pública y, sin percatarse de que un poder invisible los maneja, se han embriagado en la ilusión óptica de "tener" las riendas del Estado, cuando en verdad, tienen el presupuesto y la policía que guarda el orden público, y nada más. Esos grupos militares, ascendidos a la categoría de gobernan-

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

tes en el procedimiento mecánico de las llamadas tandas o promociones, conforme el cual cada cierto período "le toca llegar" al gobierno político a una determinada generación de oficiales, son responsables, en el pasado y en el presente, de cuanto significa atropello al pueblo salvadoreño, y atraso irrecuperable. Es bueno, no obstante, dividir la carga o responsabilidad histórica entre esas tandas militares y los civiles, universitarios generalmente, que los ayudaron a gobernar con el beneplácito de la oligarquía y a veces, en rarísima ocasión, en contra de la opinión de los poderosos de la tierra y el dinero.[21]

La posición de las fuerzas armadas y de sus representativos merece, desde luego, un análisis más profundo. Para el caso que nos ocupa, el de la violencia, importa señalar cómo la clase oligárquica apela al ejército y a los cuerpos de seguridad para tachar de "subversiva" toda acción o reacción contra el estado injusto en que descansa la sociedad salvadoreña. Incluso civiles y militares que ayer no más se adherían a movimientos de reivindicación popular, una vez instalados en los cargos públicos cambian de actitud y condenan como "comunismo" las frases y posiciones de los que se encuentran en la llanura reclamando cambios y transformaciones sociales.

Podría aceptarse como "subversiva" toda acción, violenta o no, que pretenda cambiar las realidades económicas y sociales. Y hasta podría, también, aceptarse como parte de la violencia de abajo la toma de conciencia de clase y el aglutinamiento en torno a un programa político, siempre que se acepte como violencia el hecho simple y cotidiano de la mala paga a los trabajadores, la explotación racional y sistemática de los campesinos y de otros sectores obligados a vivir en condiciones miserables, y sin la menor posibilidad de influir por medios pacíficos en la conducción de la sociedad.

Aquí tenemos la dicotomía en concreto. En tanto unos pocos **deciden** todo el destino de la nación, valiéndose de una falsa democracia y de una Constitución que otorga derechos en el papel, otros sufren toda clase de exacciones sin poder defenderse, sin siquiera apelar a la fuerza armada (instituída para cumplir y hacer cumplir el orden constitucional) pues ello también es concebido como acto subversivo, cuando no sedicioso, etc. Con tal suerte de reglas, las clases oprimidas o violentadas no tienen otra alternativa que manifestarse en las elecciones, condenar con el voto el sistema, oponerse con el sufragio al gobierno (y no al gobierno en sí, sino a los intereses que representa objetivamente) y esperar que el recuento de votos sea una censura de la conciencia pública contra los detentadores del poder económico y del poder político.

Y allí se presenta otra forma de violencia. **El sufragio no es efectivo**, pues los tenedores del gobierno burlan las elecciones, recurren a la imposición, al fraude, a la corrupción del sistema democrático y frustran a las masas en sus aspiraciones y en sus inquietudes. Esta forma de violencia, ejercida con alevosía, escalamiento y nocturnidad, ha creado en la sociedad salvadoreña un clima propicio para la insurrección.[22] Y yo creo que en buena hora y en legítima defensa, pues cuando a un pueblo le roban algo preciado, el derecho de autodeterminarse, de ejercer su plena soberanía, lo lógico y natural es que trate de recuperar sus derechos y busque la condena y castigo del transgresor. En el caso de las elecciones fraudulentas, el pueblo ha tenido que acumular frustración, ira, impotencia, en un proceso que, tarde o temprano, se manifestará en trágicas consecuencias. Nadie diga después que la violencia es producto de agitación interesada o de ideas exóticas, contrarias a la democracia, cuando dicha violencia ha nacido en el seno mismo del sistema que padecemos, alimentada por la clase hegemónica que a lo largo del tiempo ha actuado con una visión anti-nacional y en provecho exclusivo de sus intereses y utilizado al ejército como el brazo armado contra el pueblo. . El lucro ha sido la divisa de la clase patronal, en un despeñadero de valores que muy poco le importa a los oligarcas, más obligados con la acumulación capitalista y con los monopolios que con las instituciones que la Constitución consigna para lograr la estabilidad y la paz social.

La violencia, latente y potencial en el pueblo salvadoreño, pareciera encauzarse hacia la lucha armada, como vía o camino a mediano o largo plazo. Aunque tal actitud tiene sus justificativos éticos, políticos y económicos, el hecho es que conduci-

21– Tan poderosa ha sido, o es, en estas decisiones la oligarquía que más de un civil reformista, introducido en el gabinete por los militares, ha sido depuesto por la presión del gran capital. En la época de Osorio varios civiles, cuyos nombres estamparé en otra oportunidad, fueron renunciados de cargos importantes porque llevaban muy aprisa el plan de reformas. En época reciente por lo menos dos o tres Ministros de Economía y Hacienda, y de Planificación, fueron obligados a irse por no tener la "simpatía" del poder oligárquico.

22– Por buena razón ideológica los redactores de la Constitución Política de 1950, dejaron consignado en el Art. 7 lo que literalmente sigue: "Se reconoce el derecho del pueblo a la insurreccion". Principio que legitima los actos violentos que las masas y sus dirigentes hiciesen en determinado momento, especialmente cuando la Constitución no fuese cumplida en sus aspectos vitales.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

rá a un **desangramiento infructuoso**, a una guerra interna y permanente, en la que es poco probable que las fuerzas populares se impongan a los profesionales armados del Estado. Aunque la sociedad salvadoreña comienza a experimentar este tipo de organizaciones político-militares, con la natural desconfianza y desconcierto de las clases subalternas y las oprimidas, el hecho es que, en un esquema general de la violencia en El Salvador, es imprescindible señalar la desesperación de las juventudes, dispuestas a sacrificarse en aras de un cambio radical y efectivo de las condiciones económicas del país. Estas guerrillas no son sino la respuesta ante el camino cerrado de las vías eleccionarias y la irresponsabilidad de las capas medias, sospechosamente silenciosas en el banquete de la oligarquía. La burguesía nacional ha hecho a un lado su papel reformista para acoplarse al programa económico de la oligarquía agraria, cerril al cambio, y en claro desplazamiento hacia otros rubros de explotación empresarial. El sector pequeño burgués, incapaz por si mismo de influir en las grandes decisiones, se ha "empleado" con la industria o con el gobierno, a la espera de mejores tiempos. En rarísima ocasión la burguesía nacional se ha comprometido de lleno con una organización política, excepto en el caso aislado de individuos muy politizados, cuya caracterización es obvia en el medio. Estas personalidades están situadas literalmente entre la espada del ejército, que desconfía de ellos por no ser domesticables y sumisos, y el ataque frontal del gran capital y sus voceros.

Cabe también indicar que la burguesía liberal que surgió en los albores de la independencia política de España no logró alcanzar sus objetivos políticos y económicos en el momento en que justamente debió obtenerlos. Sus planes fracasaron y cuando, a fines del siglo XIX, pudo efectuar algunos cambios, el proceso mundial capitalista había

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

desarrollado toda una estrategia para **recolonizar** a nuestros países manteniéndolos en su esfera de influencia y prácticamente como áreas económicas dependientes.

Lo que denominamos "burguesía nacional" carece de una base de sustentación propia y por ello, desde luego por su debilidad, no ha podido organizar partidos políticos ideológicos fuertes que la representen como una clase en lucha por el poder. Más bien ha dejado "hacer" y ha dejado "pasar", adaptándose en el pasado a grupos oligárquicos, bien en el área tradicional de los cafetaleros, o en la de los industriales de última hora.

La burguesía como clase, con objetivos nacionales, es precaria, ambivalente. En estos instantes se niega a jugar un papel entre la gran oligarquía agraria que determina la economía del país, y el estamento militar que pugna por transformaciones **sui-géneris**. Se inclina, creemos por mantener el **statu quo**, ante la amenaza del incipiente proletariado urbano y la inmensa masa de campesinos depauperados. Hay, como es natural, contradicciones en el seno de la burguesía de orígen democrático y liberal, pero ni un paso adelante.

Por otra parte, y ante la **polarización** de fuerzas, entre el poder oligárquico representado jerárquicamente por, digamos, 200 familias y las clases populares (trabajadores urbanos y rurales, sin tierra, con bajos salarios o totalmente desempleados), la **burguesía** que antes tenía por lo menos un programa político, ahora calla o se acomoda al gran capital nacional y extranjero.

A pesar de los esfuerzos por contener la violencia de las masas proletarias y depauperadas, tanto por la gran burguesía industrial y comercial como por los sectores de ultraderecha del ejército, el fracaso se traduce en el campo económico en que la acción de mejoramiento social es débil, modesta, y más bien encaminada a obtener dividendos financieros de aquellas capas urbanas interesadas en resolver sus problemas de vivienda y crédito; en cuanto a los métodos propiamente represivos, es evidente que sólo resultan efectivos en un momento de crisis o de peligro común para la oligarquía, la alta burguesía mercantil y el gobierno en turno. La represión genera una reacción de odio contra los ejecutores de las medidas de "orden público", en caso concreto, contra los llamados cuerpos policiales, sin advertir claramente los sectores reprimidos que la guardia, la policía y los cuerpos de choque son un mero "instrumento" del sistema y que los componentes de tales cuerpos policiales son hombres del pueblo,

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

asalariados mal pagados, sujetos reglamentariamente a la jerarquía que se "lava" las manos cuando la sangre llega al río.

Aspecto importante es señalar que la politización o concientización del pueblo es cada vez mayor. Para no situar la apreciación en años muy lejanos, partamos de las luchas reivindicativas de 1942-1944 en que el anti-fascismo fue la bandera principal; luego las escaramuzas de 1946-1948, en que se crearon las condiciones del reformismo militar más importante del período; las luchas de 1951-1952 con una variante que incursiona en los contenidos ideológicos del sistema y reclama una profundización de las reformas; los hechos de 1956-1961, en que los grupos opositores, tanto los liberales como los marxistas, se une para derrocar al gobierno de Lemus, en un intento de "montar" de nuevo el esquema reformista acelerado que Osorio y sus colaboradores habían iniciado en 1948. De 1966 a 1972 las acciones de calle, las huelgas, las protestas, van desde el desplazamiento ideológico de los partidos de pequeña burguesía a un radicalismo sin límite que fortalece el aparecimiento de las guerrillas urbanas, fenómeno enteramente nuevo en la vida del país. En esa línea de pensamiento, cabe advertir que la politización ha ido creciendo, consolidándose, afirmándose, en una línea de rectificación y ratificación que ha obligado a los gobiernos de 1931 a la fecha a "tomar en cuenta" al pueblo, a tratar de satisfacer sus demandas en una cadena de programas incumplidos, de partidos que han ofrecido una y otra vez los "cambios" sin que en la práctica éstos tengan vigencia. La politización es tal que ningún grupo económico, político, puede intentar nada sin contar con este factor de perturbación social.

El fracaso político de la burguesía mercantil e industrial estriba en que no cuenta, precisamente, con un partido, con una base social que la apoye; la pequeña burguesía conservadora asociada con los altos mandos del ejército sí tiene una organización política, a la cual recurre en los períodos electorales para "formalizar" el traslado del gobierno a las personas escogidas por el Presidente de la República que a su vez es el jefe supremo del partido en el gobierno, comandante general de la fuerza armada, además de representar, a la manera de un moderno cacique, la voluntad de la élite castrense; la pequeña burguesía liberal y de inspiración cristiana han hecho, respectivamente, sus partidos políticos y derivan en la actualidad hacia una orientación cada vez más "reformista", populista, y hacia un socialismo aún no clarificado a la luz de las teorías y las doctrinas en boga; los pequeño-burgueses radicalizados después de la revolución cubana, con el apoyo de capas obreras e ínfimas resonancias en el campo, han intentado participar con un programa revolucionario. Todo este esquema dentro de una multitud de matices que reflejan aún mucho del sectarismo, el individualismo, la artesanía organizativa, de una sociedad con poca tradición efectiva en los terrenos de la política. El caso es que todos los grupos apelan a las masas para obtener el apoyo a sus planes y programas; para ganar la confianza del pueblo ofrecen, prometen, y hasta pretenden hacer creer que las cosas cambian. Esta apelación, en todos los planos, indica que la lucha por el gobierno es cada vez más dura, al grado de producir un tipo de "alianza" electoral que estaría muy lejos de concebirse en la teoría. Ese es el esquema mismo de la "oposición" al sistema y al gobierno, en el que concurren "reformistas católicos", reformistas radicales de origen liberal y hasta revolucionarios ortodoxos. La instrumentalización gubernamental de **slogans**, frases, ideas y vagos discursos "reformistas" y hasta "revolucionarios" revela cuán importante es a la hora del voto, ganar las urnas. Y a veces a como sea posible, todo por mantener una democracia formal, debilitada en su fondo y abiertamente rota en sus instituciones.

Debemos dejar claro que todo esto es un juego. Que la apelación a la conciencia del pueblo es sólo un modo de afianzar un gobierno que "ya se tiene" pero que ha sido usurpado a lo largo de los años, usando todos los procedimientos: desde el cuartelazo preventivo, el fraude en la decisión de quienes son depositarios del "destino manifiesto", la corrupción, el escamoteo electoral propiamente dicho, la componenda con la oligarquía o el coqueteo con grupos ideológicamente adversos, la concesión en ésta o aquella tolerancia, la dádiva en forma de ley sin asidero en la realidad, y el garrotazo, el destierro, la tortura y la eliminación de quienes son considerados peligrosos para el sistema y el régimen.

El juego es dual, pero crea toda una órbita de espejismos. Por una parte; la pelea por mantener lo que se ha "conquistado", sin que manos más drásticas se hagan una madrugada del garrote institucionalizado; y por otra, la gran borrachera de quienes creen que sólo el balazo contra el balazo, el arma contra el arma puede definir el destino nacional. Alguien preguntará ¿qué hace la oligarquía? ¿Qué hace la burguesía mercantil? Negocio. Puros negocios. Y a regañadiente, "diálogo" con quien haya despejado las incógnitas electorales o tenga en su mano el aparato legislativo, el presupuesto, la policía, en suma **el gobierno** que, a decir del gran capital, lo extorsiona, lo amenaza con reformas y se contenta con enriquecer, por cada cinco años, a un grupo de personas más o menos incapaces.

El surgimiento de las guerrillas, en 1970, ha acabado por liquidar las inquietudes de muchos grupos progresistas que se oponían por un lado al

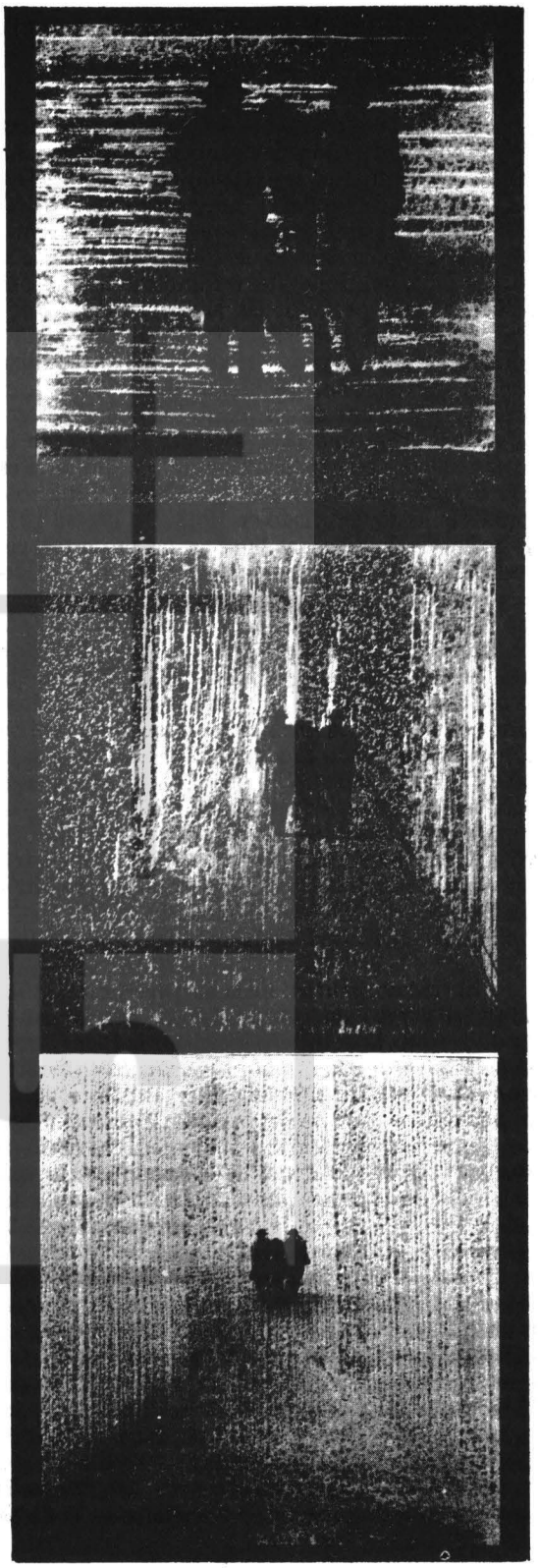
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

feudalismo agrario y por otro a las pretensiones del ejército convertido, por las circunstancias históricas, en una especie de partido político. Después de 1948, en que se expone el famoso programa de los 14 puntos, el reformismo ha ido de tumbo en tumbo, moviéndose pendularmente según contrataque la oligarquía. La cuestión está en saber si la burguesía-nacional como **clase** ha sido liquidada, desplazada, por la **naciente clase** proletaria o por sectores socialistas minoritarios, pero con mayor vocación de cambio y si en el juego de las alianzas, no para obtener el gobierno, sino para tomar el poder, cuenta en la lucha actual o futura. Puede ser que la polarización a nivel ideológico, abra brecha entre la burguesía nacional y los partidos radicales, incluso de aquellos que a pesar de su ropaje cristiano, son considerados peligrosos o "contaminados" por ideas socialistas.

La profundización de este tema pudiera arrojar mucha luz en el proceso político de El Salvador, sobre todo ahora que las vías democráticas no cuentan con gran popularidad. El país se halla frustrado por los resultados electorales que, inevitablemente, **dan el gane** al partido en el poder desde 1931, o sea a los representativos del ejército en asocio con núcleos civiles de poca o ninguna credibilidad.

Yo creo que la guerra de guerrillas en América Latina y, en particular, en El Salvador no es la opción adecuada, excepto para quienes vean el problema con mentalidad internacionalista, radicalmente desesperada y a plazo de cincuenta o cien años. Y ese es mucho tiempo para **hacer** política, aquí y ahora, excepto que deleguemos nuestra responsabilidad a las futuras generaciones.

Pero si el camino de las guerrillas es equivocado, en razón de las experiencias de Guatemala, Venezuela, Colombia y principalmente Uruguay, no deja de ser inquietante el que la **gente se arme** y busque justicia por propia mano. Es claro que así como se arman los de abajo, así lo hacen también los de arriba en un total desequilibrio social que nos conducirá a enfrentamientos y a actos que enlutarán a la nación salvadoreña. El cuadro pareciera desconsolador, si no sospecháramos que, en medio de la injusticia, se gesta siempre una respuesta que hace de la fiera un ser civilizado; o si nos pusiéramos simplemente a ver una pelea, como el buen burgués al que nada le importa sino su comodidad, o si nos sumáramos a los intelectuales del silencio, amparados en su "buena fama" o en esa prensa inocua, vacía, aliada de la injusticia que niega espacio al diálogo, al debate nacional, en un excesivo celo por mantener funcionando sus cajas registradoras. O en aquella otra empresa de opinión que todo lo envenena, lo confunde, lo tergiversa, en aras de sostener lo insostenible, y en un afán de "colorear" de rojo a quien se



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Coronel Julio Adalberto Rivera, Presidente (1962–1967

manifieste **en favor** de mejores condiciones de vida para las clases trabajadoras.

La violencia en El Salvador por causas sociopolíticas pareciera no importarle a la gran prensa, obligada como está a servir de tribuna del pensamiento y a informar objetivamente de lo que ocurre en el país. Se le da gran espacio a ese tipo de acciones de sangre: crímenes, asesinatos, violaciones, secuestros, ahorcados, y el despliegue comprende fotografías y detalles minuciosos de las víctimas y los victimarios. No deseamos que se oculten tales hechos, hechos sociales al fin, ya que de alguna manera reflejan también el grado de tensión en que se debate la vida contemporánea en lo que fuera años atrás una arcadia rural. Lo que llama nuestra atención es que no se disponga de espacio en los periódicos para el análisis sociológico, económico, político de los grandes problemas nacionales, en torno de los cuales se cifra el futuro de la nación. Se ignora la violencia institucional, el desajuste de clases, el desfase entre la Constitución de la República y la realidad de quienes viven en un plano infrahumano, miserable. Y esto que señalamos no es demagogia, ni politiquería de partidos, sino injusticia cuantificada.

Es irónico observar cómo en alguna fecha del año se celebra el día de los Derechos Humanos y se escriben panegíricos sobre la materia. Se olvidan de señalar, sin duda, que el primer artículo de este documento aprobado por todas las naciones civilizadas es manifiestamente claro "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Según esta ley universal "la esclavitud y la servidumbre" están abolidas y condenadas; las torturas, penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, penados; la arbitrariedad en las detenciones, prisiones y destierros igualmente prohibidos; el derecho al trabajo y a una remuneración equitativa y satisfactoria, garantizado, juntamente con

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

un nivel que conlleve salud, educación y respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Pues estos derechos inalienables, de espíritu y tradición occidental, son negados y convertidos en una retórica falsa, hueca, a la hora de hacerlos efectivos.

Algún filisteo, de esos que escriben sendos discursos en elogio de la libertad en abstracto, dirá que no hay que confundir la filosofía con la economía, ni el producto del trabajo con el comercio y sus beneficiarios. Buena prosa ésa de hablar del hombre en absoluto, sin mancharse la túnica, en una sociedad donde lo que prevalece es el **hambre concreta**, la falta de calorías y proteínas para subsistir. No olvidemos que de esa necesidad vital, primaria, surge el hambre y la sed de justicia, y que, en determinado momento, esa conciencia se traduce en violencia, en legítima violencia. El agredido en su dignidad humana tiene históricamente el derecho de defenderse.

La violencia que caracteriza a la sociedad salvadoreña, en todos los niveles, cesará cuando la democracia se imponga sobre la oligarquía; la libertad sobre el despotismo al que, por hoy, llamaremos "caciquismo" y no fascismo como lo califican otros escritores; la justicia social sobre la explotación y la alienación económica; la cultura sobre la barbarie. En suma cuando el derecho, como expresión de una nueva sociedad, haga realidad un orden de convivencia digna, de elevación de lo humano en concreto, contra la prepotencia de castas y clases privilegiadas.

Es difícil en un breve artículo sobre la violencia estructural, presentar conclusiones más o menos definitivas. El medio mismo en que se escriben estas notas está preñado de contradicciones, de toda suerte de "programas" a cual más radical y "revolucionario". El sondeo en la izquierda es de una atomización increíble, destructivo en sí mismo, y en cuanto a las derechas ya sabemos que se unen en cuanto se intentan los más pequeños cambios a la situación económica del país.

El llamado "centro", el ejército en abstracto y unos cuantos profesionales a la medida del Presidente en turno, carecen de la fuerza política necesaria para imponerse, bien porque la fiera de la oligarquía no es fácil de domeñar o porque el pueblo concientizado le niega su respaldo. El ejército como gestor político no tiene el respaldo ni de los de arriba, cuyos tecnócratas acusan al sector gubernamental de inepto, incapaz y corrupto, ni de las masas, cansadas de oir las mismas promesas de "revolución" (1948), "cambio" (1961-1964) "transformación", (1972-1976) sin que la práctica contradiga los buenos propósitos de los militares, o por lo menos, de algunos de sus líderes.

Partidarios de un régimen de paz, enemigos de la violencia por nuestra propia formación humanística, quisiéramos que los cambios estructurales se efectuaran sin sangre, en orden y dentro de un régimen auténtico de libertades ciudadanas. El hecho, no obstante, es que la confrontación es ya un lastre y el llamado centro, eje circunstancial de las decisiones políticas, no podrá hacer reformas y cambios si no se apoya real y efectivamente en el pueblo.

Otras posturas revolucionarias, más allá de esta posición de **reformismo radical** que propugnamos, continuarán golpeando al sistema. Pero ese análisis, como el de la caracterización de la extrema derecha y sus métodos de acción, será objeto de posteriores escritos.

CONCLUSIONES

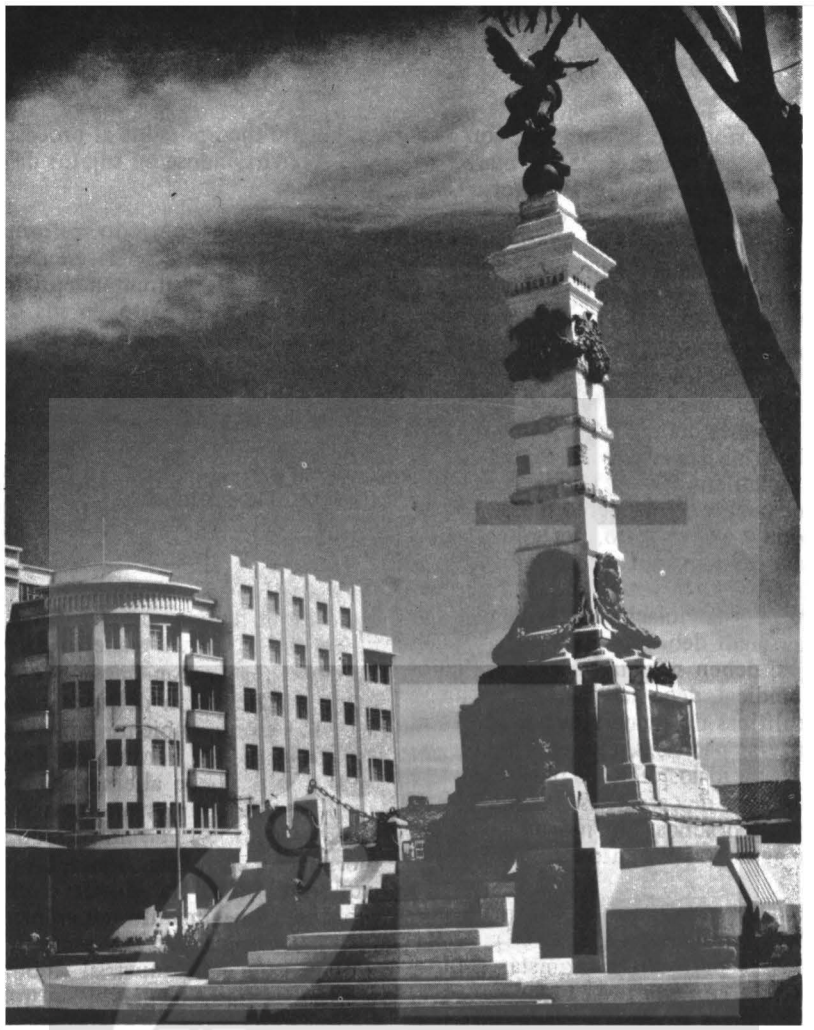
1.- La violencia institucional del país es producto de la injusta estructura de la tenencia de la tierra. Se carece de una equitativa distribución de la riqueza. Hace falta mayor seguridad social. El problema no es de salarios, sino de acceso al bienestar espiritual y material por parte del pueblo.

2.- Los gobiernos civiles, tanto del siglo XIX como del presente, han sido peores que los gobiernos militares. Tal aseveración se desprende de que los gobernantes gamonales y sus colaboradores de levita fomentaron y mantuvieron al país en un proceso de estancamiento agrario, bajo un sistema de explotación y servidumbre de las clases rurales y de los artesanos de las ciudades.

3.- La crisis mundial de 1929 y su impacto en la economía nacional, más los factores de política interna, produjo el levantamiento insurreccional de 1932 y la toma del gobierno por la elite militar que, desde diciembre de 1931, prevía la confrontación entre las masas campesinas sin tierra y con salarios de hambre y los cafetaleros arruinados por los bajos precios del producto.

4.- La modernización del Estado de El Salvador se inicia con el ascenso al gobierno del Gral. Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944), quien con la colaboración de la pequeña burguesía de origen liberal y el apoyo de algunos cafetaleros progresistas del sector medio, logró introducir una serie de reformas de beneficio incalculable. El reformismo de Martínez se llevó a cabo sin la intervención extranjera y aunque en muchos aspectos pecó de "paternalismo" y de "mano fuerte", es obvio que perjudicó a la gran oligarquía.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



5.- El divorcio de la pequeña burguesía con Martínez se debió no a las reformas económicas y sociales, sino a violación de principios democráticos. Fundamentalmente al **continuismo** en la Presidencia de la República, alternabilidad en el gobierno que la Constitución de 1886 había consignado como una gran conquista liberal. En el fondo, a Martínez lo botaron con el beneplácito de los oligarcas y la ayuda de la naciente burguesía industrial y comercial. Martínez se apoyó en el partido **Pro-Patria** para instrumentalizar la administración pública a su favor.

6.- Otro gran hito en el plan reformista del país lo constituyó el gobierno del Consejo de Gobierno Revolucionario, instaurado el 14 de Diciembre de 1948, el cual dictó una serie de decretos-leyes de gran importancia para el desarrollo económico y social del país. Nuevamente la "juventud militar" apoya la **gestión de cambios** y como consecuencia se decreta la Constitución de 1950, de inspiración social **demócrata**, la cual introduce nuevos conceptos políticos, económicos, sociales en la vida del país. Este instrumento jurídico es la base del actual proceso de modernización de la vida salvadoreña, aunque muchos de sus principios han quedado en el papel. La Constitución de 1950 es un marco obligado para cualquier proceso de transformación de El Salvador; sus instituciones han arraigado en la conciencia nacional, por mucho que algunos periodistas de mentalidad manchesteriana la tilden de "intervencionista", "socializante", etc. El Consejo de Gobierno Revolucionario estuvo constituido por los mayores Oscar Osorio y Oscar Bolaños, Coronel Manuel de J. Córdova y los civiles Humberto Costa y Reynaldo Galindo Pohl, éste último (y sus compañeros universitarios) el redactor principal de la nueva Carta Magna. Osorio, no obstante, fue quien respaldó militarmente el cambio. Para gobernar crearon el **Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD)**, el cual clausuró al caer el Presidente José María Lemus el 26 de Octubre de 1960.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

7.- El tercer período de reformismo, con apoyo real del ejército, se inició el 25 de marzo de 1961 al instalarse, por cuartelazo, el Directorio Cívico Militar (1961-1962). Producto de ese movimiento es la creación del **Partido de Conciliación Nacional (PCN)**, base política de los militares que han gobernado desde aquel año, y cuyos tres gobernantes han sido Julio Adalberto Rivera (1962-1966); Fidel Sánchez Hernández (1966-1972); y Arturo Armando Molina (1972-1977), los mandatarios han continuado el esquema reformista con altos y bajos, sea por las fuertes presiones del gran capital o bien por los grupos políticos civiles adversos, empeñados en que las cosas cambien con mayor rapidez y con respaldo masivo del pueblo. Consideran que el esquema ya no funciona y es necesario, por vías y caminos diferentes, que se ponga un alto al "presidencialismo" tipo Martínez. Otra vez la pequeña burguesía liberal se opone a la violación de principios democráticos: el sufragio debe ser efectivo, no debe haber desterrados, deben respetarse las leyes laborales y el fuero sindical, debe haber un mayor juego de las fuerzas políticas de manera que el acceso al gobierno, por las vías pacíficas, esté plenamente garantizado, etc., en tanto los sectores oligárquicos se oponen a algunas leyes de carácter social que se han intentado poner en práctica, sin ninguna repercusión. La cuestión agraria es el punto álgido.

8.- El crecimiento del producto nacional bruto de 1934 a 1975, los planes y esfuerzos gubernamentales de los tres períodos reformistas (Martínez, Osorio y Rivera con sus respectivos partidos) e incluso la acción de la empresa privada, no están en relación al aumento de la población de la sociedad salvadoreña. La explosión demográfica ha barrido con las metas de "desarrollo" en todos los campos. El salvadoreño en edad activa se halla en desventaja ante los índices de ingreso nacional, además de que los beneficios de la producción quedan en muy pocas manos; situación dramática que se traduce en sub-empleo, desocupación plena, marginalización y precarismo en las ciudades, pauperización en el campo. **El sistema actual es incapaz de generar el empleo que la población demanda.** La cuestión sólo podrá variar si se desplaza a la clase oligárquica de los medios de producción y se efectúa una racional e integral Reforma Agraria; si se fortalece, por otra parte, a la burguesía industrial, comercial y financiera en plan modernizante, anti-feudal, en tanto y en cuanto adquiera y manifieste una fuerte conciencia "nacional" y no entregue el país a los monopolios extranjeros; se generen condiciones de trabajo digno y retribución justa para todos, y funcionen los mecanismos necesarios para que los sectores de la burguesía media y baja jueguen el papel que les corresponde en defensa de la soberanía nacional; el proletario urbano y las masas rurales sean realmente incorporados al proceso económico y social, convirtiéndose en sujetos de su propio destino histórico.

El tercer período reformista, el del PCN de 1961-1977, está en la encrucijada: cambio real a corto plazo o enfrentamiento insurreccional con un pueblo descontento en sus distintas clases, capas y estamentos. Otra vez las élites militares tienen la palabra, tal como sucedió en 1931, 1948 y 1961. La responsabilidad cívica, la capacidad técnica y la honradez administrativa son, ahora más que nunca, factores decisivos y determinantes. El pueblo necesita volver a "creer". Y ello sólo se logrará con una reforma profunda y radical de nuestra sociedad, en cuyo sitio la dignidad humana ocupe el primer lugar.

9.- El aparecimiento de las guerrillas desde 1970 es un fenómeno nuevo en el panorama político del país. De igual manera debe considerarse la serie de secuestros con fines de rescate, asesinatos políticos, desaparición de líderes sindicales o gremiales, etc., en un ambiente tenso que presagia nuevas "confrontaciones" entre las fuerzas en pugna. La oposición no tiene alternativas, pues la representación proporcional es un fracaso y el trauma eleccionario de 1972 aún no ha sido superado. El pueblo no cree en las elecciones. En todo caso el "desarrollismo" oficial ha entrado en una etapa de crisis, proclive a un aumento del empleo de la fuerza y a una inestabilidad en los sectores del gran capital y de la burguesía industrial y comercial, ya no digamos en las clases medias y de trabajadores urbanos y rurales en proceso de empobrecimiento.

10.- La estructura económica del país, de no sufrir cambios fundamentales, mantendrá el actual clima de inseguridad, frustración, ira e impotencia y probablemente de confrontación entre los militares reformistas, aún de los más tibios, y los representativos del gran capital. Las alianzas pueden generar sucesos como los de 1944, y luego respuestas como la de 1948.

11.- Lo que importa, en definitiva, es que El Salvador se modernice pacíficamente, sin sangre, y con el mayor grado de factibilidad posible. Y para ello se necesita, no sólo de definición y firmeza, sino de una enorme capacidad de diálogo y sensibilidad social. El **diálogo** no implica **ceder** en los objetivos reformistas, sino reafirmarlos en una concepción verdaderamente nacional, popular y democrática. Las satrapías ordenan, desde arriba, pero no transforman a las sociedades.

San Salvador, Febrero 1976.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas